

# A CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO:

## Revisión de las fuentes de la disciplina a la luz de las normas del Bloque de Constitucionalidad en Bolivia

THE CONSTITUTIONALIZATION OF ADMINISTRATIVE LAW:

*Review of the sources of discipline in light of the norms of the Constitutionality Block in Bolivia*

Fecha de recepción: 09 | 10 | 2025

Fecha de aceptación: 28 | 1 | 2025

Alan E. Vargas Lima<sup>1</sup>

Miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC), y de la Asociación Boliviana de Estudios en Derecho Administrativo (ABEDA).

### Resumen

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo plantear una revisión del contenido general y las fuentes del Derecho Administrativo, precisando algunas definiciones para su comprensión adecuada; ello para luego poner énfasis en el marco normativo vigente, destacando la importancia de las fuentes de producción y de conocimiento de esta rama especializada, a la luz de tres elementos esenciales: la Constitución boliviana de 2009 -que se caracteriza por ser una Constitución normativa y ampliamente garantista-, el Bloque de Constitucionalidad vigente -de observancia obligatoria para las autoridades administrativas-, y la Jurisprudencia Constitucional relevante, a fin de destacar su enorme utilidad para la enseñanza-aprendizaje del Derecho Administrativo en Bolivia.

**Palabras clave:** bloque de constitucionalidad, constitucionalización, derecho administrativo, derechos humanos, jurisprudencia constitucional, tratados internacionales.

### Abstract

This research paper aims to review the general content and sources of Administrative Law, specifying some definitions for its proper understanding. It then emphasizes the current regulatory framework, highlighting the importance of the sources of production and knowledge of this specialized branch in light of three essential

<sup>1</sup> Abogado Especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales (UMSA). Miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales; del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional – Sección Nacional (Bolivia); del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica (LATIN IURIS – Bolivia); y de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales (ASDEFUN – Bolivia). Miembro Honorario del Consejo Académico de la Sociedad Filosofía y Estado Constitucional APEX IURIS (Perú); Director adjunto del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales CLIJUS (México) – Capítulo Bolivia; Miembro de la Asociación Juristas de Iberoamérica (ASJURIB - España). Docente invitado a nivel posgrado en la Universidad Simón I. Patiño (USIP) y en varias Universidades bolivianas. Es autor del libro: *Los Principios de la Ley de Procedimiento Administrativo en Bolivia* (INNOVA, 2023). E-mail: [alanvargas4784@gmail.com](mailto:alanvargas4784@gmail.com) ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6372-7870>

elements: the Bolivian Constitution of 2009 –which is characterized by being normative and broadly guarantee-based– the current Constitutional Block –mandatory for administrative authorities– and relevant Constitutional Jurisprudence, in order to highlight its enormous usefulness for the teaching and learning of Administrative Law in Bolivia.

**Keywords:** constitutionality block, constitutionalization, administrative law, human rights, constitutional jurisprudence, international treaties.

## Introducción

Esta investigación fue escrita originalmente para ser difundida entre los estudiantes de los cursos de posgrado y especialización que continuamente se llevan adelante en la Universidad Simón I. Patiño (USIP).

La ciencia del Derecho Administrativo es una disciplina jurídica en permanente evolución<sup>2</sup>, al igual que su objeto de estudio, que es la Administración Pública, la cual atraviesa por constantes transformaciones estructurales e innovaciones organizativas, acudiendo inclusive a los recursos tecnológicos para la satisfacción oportuna del interés colectivo<sup>3</sup>.

Como bien precisa el jurista español Jaime Rodríguez-Arana (2022), el derecho administrativo es, en la actualidad, una rama del derecho público que, partiendo de la norma fundamental, aspira a la realización efectiva del modelo de Estado social y democrático de derecho, que caracteriza la forma de Estado dominante en el planeta y que constituye también la base sobre la cual se asienta el modelo de Estado plurinacional.

Así también, se debe reconocer que, desde sus orígenes, el Derecho Administrativo se nos presenta dependiente del interés general, es decir, de aquellos asuntos supraindividuales que afectan a todos por ser comunes a la condición humana, y que reclaman una gestión y administración equitativa, capaz de satisfacer las necesidades colectivas en un marco de racionalidad y de justicia.

En el contexto boliviano, cabe tener presente que la actividad de toda la Administración Pública, para alcanzar legitimidad, tiene —y debe tener— su base en las normas previstas por la Constitución. No solo porque en ella se señalan los principios fundamentales que guían la actividad administrativa del Estado, sino también porque contiene los principios ético-morales que deben orientar la conducta cotidiana de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la Constitución consagra una serie de derechos fundamentales y garantías que, siendo inherentes a la dignidad humana, constituyen límites infranqueables en el ejercicio del poder público frente a los ciudadanos, determinando el alcance de las actividades de las autoridades y regulando el sentido de sus decisiones, independientemente del nivel de

---

<sup>2</sup> Según Jaime Rodríguez-Arana (2022), el Derecho Administrativo de un Estado social y democrático de derecho es una rama del derecho público en continua evolución, el cual presenta un común denominador que lo caracteriza esencialmente: el *servicio objetivo al interés general anclado en la dignidad humana*. En efecto, su inserción en un Estado social y democrático de derecho lo obliga a asumir con más intensidad su papel defendiendo, protegiendo y promoviendo tal dignidad y los derechos fundamentales que de ella se derivan, sean individuales, sean sociales. Precisamente, para comprender el sentido y alcance de la dignidad humana reconocida por la Constitución es que se debe acudir a la interpretación desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin perjuicio de consultar las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que de ella ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

<sup>3</sup> En este sentido, Rodríguez-Arana (2022) entiende que el Derecho Administrativo y la Administración pública son dos realidades íntimamente unidas, tanto que una sin la otra no tienen explicación; en consecuencia: "La Administración pública precisa del derecho para que los poderes y potestades estén al servicio objetivo del interés general. Y el derecho administrativo ordena jurídicamente el ejercicio del poder público que ordinariamente proviene de la actuación administrativa. Por eso, las políticas públicas no se pueden estudiar al margen del derecho, aunque, efectivamente, el derecho no sea el único aspecto a considerar, pues es menester analizar, dada la consideración plural y multidisciplinar de la Administración pública, los enfoques económicos, organizativos, históricos o sociológicos" (p. 189).

gobierno en que se encuentren. Estas autoridades son, en última instancia, las encargadas de materializar los principios, valores, derechos y garantías consagrados en la Norma Suprema<sup>4</sup>.

Sumado a ello, se debe considerar que el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico ha renovado el sentido y alcance de las normas constitucionales, cuya fuerza expansiva condiciona ahora la legislación, la jurisprudencia y la actividad de gobernantes y gobernados. En consecuencia, dada la trascendencia jurídica, política y social de la Ley Fundamental, resulta indispensable revisar las fuentes de producción y de conocimiento de una disciplina tan dinámica como el Derecho Administrativo. Asimismo, su enseñanza-aprendizaje debe guiarse por las bases constitucionales, de modo que las normas del ordenamiento jurídico administrativo sean consonantes con las normas axiológicas, dogmáticas y orgánicas de la Constitución y del Bloque de Constitucionalidad. De esta manera, se asegura un grado suficiente de validez formal y material, respaldado por la presunción de constitucionalidad.

Ello implica que la Constitución en Bolivia debe entenderse no solo de manera formal —como reguladora de las fuentes del Derecho y de la distribución y ejercicio del poder entre los órganos estatales—, sino también como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías que deben guiar la actividad de todos los órganos del poder público. En especial, los legisladores y las autoridades públicas, tanto judiciales como administrativas, deben fundamentar sus actos y decisiones en las normas constitucionales, que constituyen su fuente principal de legitimación.

La actividad de la Administración Pública en Bolivia debe guiarse bajo la premisa de que la Constitución, al contener normas de aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, constituye una de las fuentes indispensables del Derecho en general y del Derecho Administrativo en particular. Así, la Constitución se erige como la base y el fundamento del ordenamiento jurídico que regula la actividad administrativa, estableciendo las normas principales que estructuran el sistema jurídico y actuando como parámetro de validez formal y material para toda la pirámide normativa del Estado.

## 1. Marco teórico conceptual sobre Derecho Administrativo

En el contexto de la relevancia constitucional explicada anteriormente, cabe hacer notar que, en el estudio de esta disciplina, se pueden encontrar tantas definiciones sobre Derecho Administrativo como diversidad de autores hay en el mundo.

De ahí que, por ejemplo, en su forma más simple, Otto Mayer (1949) definiera el Derecho Administrativo como “el derecho relativo a la Administración” (p. 68)<sup>5</sup>; sin embargo, esta clásica expresión

---

<sup>4</sup> La SCP 0112/2012 de 27 de abril, a tiempo de establecer la obligatoriedad de la aplicación directa de la Constitución (2009) señaló que la obligatoriedad de las normas constitucionales y de los principios se visualiza claramente en el art. 9.4 constitucional, que establece como fines y funciones esenciales del Estado garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución; norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/as, la cual dispone que deben “promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución” y agrega además que:

Estos mandatos jurídicos **son para todo el poder público** y para la convivencia social de los ciudadanos. **A los legisladores** (del nivel central-Asamblea Legislativa Plurinacional, las entidades territoriales autónomas) **y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos**, al momento de realizar desarrollo legislativo o en la interpretación y aplicación del Derecho Indígena “en sentido de que en el proceso de creación de las normas no ignore los principios, toda vez que al ser estos la base en la que se inspira el modelo de sociedad que la Constitución propugna, debe existir coherencia y armonía entre la ley a crearse y los principios de la Constitución”. **Al Órgano Ejecutivo**, en el ejercicio de su potestad reglamentaria (emisión de decretos supremos, resoluciones supremas, etc.), **a las autoridades judiciales o administrativas** en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana. (...) Finalmente, **las normas constitucionales-principios, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en el resto de las normas constitucionales y todo el ordenamiento jurídico**. En efecto, la base principista, fundamentalmente contenida en la parte dogmática de la Constitución (principios, valores, derechos y garantías), guían la acción de los órganos del poder público y de la propia convivencia social, o lo que es lo mismo, la organización del poder (parte orgánica) que debe desarrollarse sobre la base de la parte dogmática.

<sup>5</sup> Por su parte, en la década de 1970, el profesor Brewer-Carías (1979) escribía lo siguiente: “El derecho administrativo, en la actualidad, es el derecho de la intervención del Estado en la vida económica y social; es el derecho de las limitaciones y regulaciones a los derechos individuales, a los derechos económicos, a los derechos sociales y a los derechos políticos de los administrados; y es el derecho de la

ofrece un concepto cabal de la materia. Según Pablo Dermizaky (1999), el verdadero concepto se desprende del hecho de que la actividad administrativa genera necesariamente relaciones entre la Administración y los administrados, relaciones que requieren normas jurídicas para ser ordenadas y eficaces; dichas normas constituyen lo que se denomina Derecho Administrativo.

En este sentido, autores como Roberto Dromi, Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas consideran que el Derecho Administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa del Estado y que trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo, lo que implica el conjunto de operaciones que debe ejecutar para la realización de sus fines. No obstante, este parece ser un concepto muy genérico sobre el alcance de la disciplina, ya que no logra precisar su naturaleza jurídica ni señala los aspectos mínimos que deben incluirse en su estudio.

En cambio, para García de Enterría y Fernández (1988), el Derecho Administrativo no se limita a los órganos de poder o a una sola función, sino que regula a los sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administración pública, la cual es el requisito indispensable para que exista una relación jurídico-administrativa. Finalmente, los autores concluyen señalando que no se trata de un derecho privilegiado, ya que además existe un cuadro de garantías mínimas para los ciudadanos. Como se puede apreciar, este concepto nos brinda mayores detalles acerca de la naturaleza jurídica del Derecho Administrativo, asignándole una doble dimensión: no solo se dirige a regular la Administración Pública, sino que también tiene en cuenta los derechos fundamentales de los ciudadanos como una limitación al ejercicio del poder público del Estado.

En el caso de la doctrina administrativa boliviana, el profesor Alfredo Revilla Quezada –notablemente influido por la doctrina francesa del siglo XIX, a través del pensamiento de Eduardo Laferrière– consideraba al Derecho Administrativo simplemente como “la rama del Derecho que preside la organización y funcionamiento de los servicios públicos” (Revilla, 1958, p. 19)<sup>6</sup>, definición que, en síntesis, contiene los mismos elementos que años antes ya había expresado el maestro argentino Rafael Bielsa (1964). Este último, además, hacía referencia al control jurisdiccional de la Administración pública como un elemento importante para entender los alcances y las limitaciones de la función administrativa; por ello definía a esta disciplina como: “[...] el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente control jurisdiccional de la administración pública” (p. 37) –libro publicado originalmente en 1947–. Similar en alguna medida era la posición doctrinal adoptaba por el autor Díez (1963)<sup>7</sup>, quien señalaba: “Entendemos por Derecho Administrativo, el complejo de principios y normas de derecho público interno que regulan la organización, la actividad de la administración pública y su control” (p. 15)<sup>8</sup>.

Sin embargo, en época reciente, el tratadista Gordillo (2013) consideraba superada la muy conocida definición de Bielsa, dado que el Derecho Administrativo francés tradicional se construyó especialmente sobre la noción de “servicio público”, al punto de constituirla en el pivote central de la disciplina. Hoy en día

---

protección de éstos frente a las acciones del Estado; además de ser el derecho relativo a la Administración Pública, su organización y funcionamiento. Hace medio siglo, era sólo esto último” (p. 24). Dicho trabajo fue publicado ese mismo año en el libro colectivo de Cuadra (1979). En igual sentido se ha pronunciado Rolando Pantoja (2016) para quien la definición de Derecho Administrativo articulada en torno a la Administración —que constituye su objeto temático de estudio— es una perspectiva ampliamente aceptada por el *ius administrativismo* americano.

<sup>6</sup> Según Gastón Jèze (1948): “el derecho administrativo es el conjunto de reglas especiales relativas al funcionamiento de los servicios públicos” (p. 1). Lo insostenible de este criterio —decía Jorge Fernández (2016)— reside en la diversidad de versiones del concepto de servicio público, así como la circunstancia de que, siendo una parte importante del derecho administrativo, el servicio público no agota el objeto del mismo, razón por la que este criterio, promovido por la llamada escuela del servicio público, encabezada por León Duguit, ha venido a menos.

<sup>7</sup> Una reseña bibliográfica y crítica de esta obra sobre Derecho Administrativo puede encontrarse en Nava Negrete (1965)

<sup>8</sup> Al respecto, cabe considerar que según Gordillo (2013):

El derecho administrativo es, pues, una disciplina científica, jurídica y, por ende, una rama de la ciencia del derecho. No creemos acertadas, en consecuencia, las definiciones que conceptúan al derecho administrativo como un “conjunto de normas y de principios de derecho público”, pues hacen prevalecer un carácter legalista y exegético antes que metodológico o cognoscitivo en el concepto pertinente (p. 105).

han surgido muchos otros temas de fundamental importancia en la materia y que no tienen, sin embargo, una relación directa con aquella. Así, además de los mencionados, puede recordarse toda la teoría del *acto administrativo*, las empresas estatales que no prestan servicios públicos, la *planificación económica*, entre otros. Por ello, si bien la noción de servicio público sigue siendo para algunos importante, no es en absoluto la más importante de la materia y no justifica por ello que se defina en base a ella al Derecho Administrativo (Gordillo, 2013). En este sentido, el citado autor argentino ha llegado a definir al Derecho Administrativo como "la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra ésta" (Gordillo, 2013, p. 115).

Así también, el gran tratadista Marienhoff (1980) definía esta disciplina como "el conjunto de normas y principios de derecho público interno, que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas y las de las entidades administrativas con los administrados" (p. 136), lo que indudablemente nos brinda una pauta del alcance de sus regulaciones jurídicas.

En época reciente —y teniendo como componente esencial a la Administración pública en el contexto boliviano—, el autor Juan Alberto Martínez Bravo (2018) ha llegado a definir al Derecho Administrativo como "el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la organización y funcionamiento de los órganos administrativos y sujetos estatales, subordinados y en relación de tuición, respecto de los órganos del poder público, y las relaciones de aquellos para con los administrados" (p. 69).

Así también, hace algunos años atrás, luego de analizar los principales criterios existentes —por ejemplo: a) *criterio legalista*; b) *criterio subjetivo: de la actividad total del Estado, de la actividad del Poder Ejecutivo, de la actividad de la Administración pública*; c) *criterio objetivo: funcional, de los servicios públicos, de las relaciones jurídicas*; d) *criterio mixto*— para definir al Derecho Administrativo, el profesor mexicano Fernández Ruiz (2016)<sup>9</sup> afirmaba que ninguno de ellos es suficiente para lograr una definición cabal y exacta de esa rama del derecho. Así lo han entendido diversos autores quienes, por tal razón, recurren a varios de estos criterios para elaborar su definición. Así, por ejemplo, el profesor italiano Zanobini (1954) emplea el criterio de la actividad de la Administración pública conjuntamente con el criterio de las relaciones jurídicas para definir al Derecho Administrativo como "[...] la parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de la administración pública y las relaciones jurídicas consiguientes entre ella y los demás sujetos" (p. 39).

Finalmente, y en razón de rechazar la adopción de un criterio único para definir al Derecho Administrativo, el distinguido profesor venezolano Brewer-Carías (2020), al reflexionar sobre el concepto de Derecho Administrativo, opta por emplear varios criterios para elaborar, en los siguientes términos, su definición mixta — a la cual nos adscribimos por su visión integral de la disciplina—:

El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que regula los sujetos de derecho o personas jurídicas que conforman al Estado; la Administración Pública como complejo orgánico de esas personas jurídicas estatales, y su organización y funcionamiento; el ejercicio de la función administrativa dentro de las funciones del Estado; la actividad administrativa, la cual siempre tiene un carácter sublegal, realizada por los órganos de las personas jurídicas estatales; y las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas jurídicas estatales o las que desarrollan la actividad administrativas, y los administrados. (p. 28)

---

<sup>9</sup> El mencionado autor sostenía lo siguiente:

en consecuencia, repito, se puede afirmar que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares (Fernández, 2016, p. 58).

## 2. Marco metodológico

La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación se basa en la revisión bibliográfica sobre el origen y naturaleza jurídica de la disciplina del Derecho Administrativo General a nivel nacional, complementada con la verificación jurisprudencial de un universo de sentencias constitucionales emitidas en materia constitucional y administrativa por parte del Tribunal Constitucional en su primera época (1999-2007), hasta la sistematización jurisprudencial relativamente reciente realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (2012-2015).

En el proceso de investigación se procedió a la recolección de las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el fin de comprender los alcances del principio de aplicabilidad directa de la Constitución, así como la naturaleza jurídica del debido proceso en sede administrativa, y, asimismo, verificar su evolución a través de las distintas líneas jurisprudenciales construidas hasta época reciente.

Para identificar las sentencias constitucionales analizadas en este trabajo, se realizó una búsqueda con las frases: “aplicación directa”, “debido proceso administrativo”, “derechos fundamentales”, “principios”, “Ley 2341” y “procedimiento administrativo” en el Buscador Aletheia, sistema de consulta de jurisprudencia de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional —esto respecto de las sentencias emitidas desde el año 2012 hasta el año 2023, cuando se reinstala el Tribunal con nuevos magistrados elegidos por voto popular—.

## 3. Notas sobre el surgimiento del derecho administrativo y su estudio doctrinal

### 3.1. Antecedentes generales

Teniendo en cuenta que la Administración es inseparable del Estado, y que este ha existido en diversas formas desde la más remota antigüedad —lo que significa que la historia también es fuente indispensable de conocimiento de esta disciplina—, es lógico pensar que siempre ha existido un conjunto de normas que, aunque embrionarias, pueden considerarse como antecedentes del Derecho Administrativo moderno.

Durante la Edad Media, para conseguir la expansión de sus propiedades y dominios, los reyes estimularon la elaboración de técnicas y prácticas administrativas, conocidas posteriormente como la **cameralística**, cuyo estudio fue introducido en las universidades prusianas por Von Giusti a mediados del siglo XVIII. Dicha cameralística constituye, en realidad, el primer cuerpo orgánico de normas sobre Administración pública.

Se dice que **Laferrière** fue el primero en separar, en la Francia de 1860, la Ciencia de la Administración del Derecho Administrativo, atribuyendo a la primera las normas y técnicas de la administración en general, y al segundo las normas jurídicas concernientes a la Administración pública.

Según relata Dermizaky (2001), el Derecho Administrativo como tal nació en Francia poco tiempo después de la Revolución, a través de un principio y de un fallo judicial (*Arrêt*). Ello lo explica el *Professeur* René Chapus (como se cita en Dermizaky, 2001): el primero —el principio—, derivado de una interpretación de la separación de poderes, es el de la separación de las autoridades administrativas y judiciales. Según la Ley de 16-24 de agosto de 1790 sobre organización judicial, reiterada en la Ley de 16 Fructidor, Año III, la acción de la Administración, cuando actúa como poder público, no debe ser juzgada por los tribunales judiciales. En virtud de estas leyes se instituyó, en el Año III, tribunales especializados para conocer las controversias de la Administración como poder público: los consejos de prefectura (reemplazados en 1954 por los tribunales administrativos) y el Consejo de Estado.



Cabe destacar que el primer acto de la jurisdicción administrativa en Francia tuvo lugar con el famoso **Arrêt Blanco, de 8 de febrero de 1873**<sup>10</sup>, mediante el cual el Tribunal de Conflictos señalaba que la Administración pública "no puede regirse por los principios del Código Civil, por las relaciones de particular a particular", debido a que "ella tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y el propósito de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados" (Chapus, 1998, p. 2).

Por otro lado, se debe rememorar que la primera cátedra sobre esta materia se introdujo en la Universidad de París en 1828 y, al año siguiente, el Barón de Gérando (1772-1842) escribió sus «Institutos de Derecho Administrativo Francés». De igual modo, en Italia, la primera obra escrita sobre esta disciplina apareció una década antes, en 1814, con el título de «Principios fundamentales de Derecho Administrativo», del autor Juan Domingo Romagnosi (1761-1835).

### 3.2. Antecedentes en Bolivia

Durante la Colonia, el territorio que hoy es Bolivia estaba administrado por la Real Audiencia de Charcas, que dependía directamente del Rey de España, aconsejaba a los virreyes y podía reemplazarlos en caso de ausencia o muerte. Trazaba sus planes de gobierno y administraba justicia, siendo representada por los gobernadores en los diferentes distritos, a quienes asesoraba un cuerpo colegiado denominado Cabildo. El gobierno local estaba a cargo de los corregidores.

El **Cabildo** era un órgano similar al Ayuntamiento español de la Edad Media y estaba integrado por un alcalde, regidores y otros funcionarios, cuyo número fluctuaba entre seis y veinticuatro, según la importancia de la ciudad. Este órgano se ocupaba de la administración, impuestos, salubridad; asimismo, se constituía en Tribunal de primera instancia<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> El *Arrêt Blanco* fue una sentencia dictada el 8 de febrero de 1873 por el Tribunal de Conflictos francés. Esta sentencia es considerada un precedente pionero del Derecho Administrativo y un acta fundacional de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El 3 de noviembre de 1871, una niña de 5 años llamada Agnès paseaba por la vía pública de Burdeos cuando sufrió un accidente. Aconteció que, justo cuando pasaba por delante de una manufactura de tabacos, fue arrollada por una vagoneta empujada por empleados de la tabaquera. La mala fortuna quiso que la vagoneta le pasara a la niña por encima de la pierna y que ésta debiera ser amputada como consecuencia de las lesiones producidas. El padre de la niña, el Sr. Blanco, decidió demandar solidariamente, tanto a los empleados como al propio estado francés, en tanto que titular de la manufactura reclamando en concepto de indemnización la cantidad de 40.000 francos.

A partir de aquí, se inició un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas -el Prefecto de la Gironda- y la jurisdicción civil -el Tribunal Civil de Burdeos- para determinar a quién correspondía conocer de la citada reclamación. Pues bien, esta discusión acabó llegando al **Tribunal de Conflictos** quien, el 8 de febrero de 1873, dictó el célebre **Arrêt Blanco**, en el que resolvió la controversia. El Tribunal entendió que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, no puede regirse por las mismas reglas con las que se dirimen las reclamaciones entre particulares, es decir, por el Derecho Civil. Así, sostuvo que la responsabilidad del Estado ni tenía carácter general ni absoluto, y que era necesario el establecimiento de reglas especiales que conciliaran el interés general, los derechos del Estado y los derechos de los particulares. Así pues, el Tribunal concluyó que los tribunales civiles no eran competentes para conocer de las reclamaciones al Estado, siendo sólo las autoridades administrativas las autorizadas para esta función.

En definitiva, las reglas especiales al margen del Derecho civil a las que se refería el Tribunal, son lo que viene conformando el Derecho Administrativo y la exclusión de la competencia de los tribunales civiles tiene sus consecuencias en la existencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Para muchos, esta resolución es considerada el acta fundacional del Derecho Administrativo. En el año 2023 se han cumplido los 150 años de tan relevante resolución y es por ello que puede decirse que se han cumplido 150 años de existencia del Derecho Administrativo (Martínez Guzmán, 2023).

Al presente han transcurrido 152 años desde la emisión del fallo Blanco: un precedente pionero del Derecho Administrativo, que fue dictado por el Tribunal de Conflictos francés, y consagró importantes conceptos en materia de competencia, responsabilidad del Estado y servicios públicos. El texto del fallo puede verse en Corda (2024). Asimismo, un compendio de la **Jurisprudencia Administrativa del Consejo de Estado Francés**, puede encontrarse en Instituto Nacional de Administración Pública (2015).

<sup>11</sup> El cabildo actualmente se ha convertido en un auténtico ejercicio ciudadano que está reconocido no solo en la Constitución boliviana y la Ley del Régimen Electoral, sino también en el sistema interamericano. Así, la Constitución boliviana consagra que la soberanía reside en el pueblo y reconoce el gobierno democrático, representativo y popular. Entre estas figuras están el cabildo, el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea y la consulta previa. Por ello y con el sello editorial de *El País*, el pasado mes de febrero de 2025, el jurista boliviano William Herrera Añez presentó su libro *El cabildo popular en el bicentenario cruceño* en el Comité Pro Santa Cruz (Herrera Añez, 2025).

Estos antecedentes logran poner en evidencia que la historia también constituye fuente indispensable para conocer y comprender la evolución y desarrollo de la ciencia del Derecho Administrativo en Bolivia.

Al respecto, corresponde precisar que los primeros estudios sobre esta materia en nuestro país se iniciaron a mediados del siglo XIX. Así, el **Estatuto Orgánico de las Universidades** —aprobado mediante Decreto Supremo de 25 de agosto de 1845<sup>12</sup>— disponía que "los que quieran obtener el grado de Doctor harán un año más de estudios de Derecho Público y Civil en sus relaciones con la Administración del Estado" (art. 15).

La reimpresión de la obra del mexicano Teodosio Lares, "**Lecciones de Derecho Administrativo**", hecha en Sucre, en la imprenta López, en 1857<sup>13</sup>, para que sirviera de texto de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, fue la primera publicación hecha en Bolivia sobre esta materia<sup>14</sup>.

En 1862, y en la misma ciudad, apareció el folleto "Breves Apuntes sobre el Derecho Administrativo de Bolivia", basado en la obra del profesor español Manuel Colmeiro. Años más tarde, el entonces profesor de Derecho Público en la Universidad de Chuquisaca, Dr. José Santos Quinteros (1894) publicó en Sucre la primera edición de su obra sobre "Derecho Administrativo", en la cual lo consideraba como "la ciencia que estudia los principios que rigen la organización y funciones de los poderes y tribunales administrativos, las doctrinas concernientes a la dirección y al manejo de los intereses generales del Estado" (p. 22). Esta obra alcanzó su segunda edición, que fue publicada en La Paz en 1920 y, durante muchos años, sirvió como texto de estudio en las Facultades de Derecho de Bolivia.

Sin embargo, cabe resaltar que una de las obras en donde se logró sistematizar todo el contenido mínimo del Derecho Administrativo para la enseñanza de esta disciplina a nivel universitario durante el siglo XX fue el "**Curso de Derecho Administrativo Boliviano**" —publicado originalmente en la ciudad de Potosí en 1945—, escrito por el entonces catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés y director de la Escuela de Administración Pública, Dr. Alfredo Revilla Quezada (1958); una obra cuya segunda edición puesta al día, data del año 1958 e incluye, además, un extenso índice alfabético y cronológico de las principales disposiciones administrativas vigentes en Bolivia hasta esa época.

Finalmente, cabe señalar que, en aquel texto universitario, el mismo profesor Revilla Quezada (1958) precisaba que la cátedra de Derecho Administrativo no se separó de la de Derecho Público hasta la aprobación del Estatuto de Instrucción Pública de 15 de enero de 1874 y que, posteriormente, varias Facultades de Derecho volvieron a unirla con el Derecho Constitucional hasta mediados del siglo XX, época en que se constituyó definitivamente en materia independiente.

#### 4. Resultados y discusión

<sup>12</sup> El Decreto que aprueba el Estatuto Orgánico de Universidades fue firmado y puesto en vigencia por dos notables hombres públicos de la época: José Ballivián, como Presidente de la República, y Tomás Frías en calidad de Ministro de Instrucción Pública; posteriormente, aquella disposición fue elevada a rango de ley el 12 de noviembre de 1846.

<sup>13</sup> Para Lares (1857) el Derecho Administrativo "es la ciencia de la acción y de la competencia del poder ejecutivo, de sus agentes, y de los tribunales administrativos, en relación con los derechos e intereses de los ciudadanos, y con el interés general del Estado" (p. 2).

<sup>14</sup> En una investigación preliminar se ha comprobado que los estudios de Derecho Administrativo en Bolivia se iniciaron al promediar el siglo XIX, sobre la base de la primera publicación realizada en Latinoamérica dedicada a esta disciplina, proveniente de la pluma del notable profesor mexicano Teodosio Lares, con el noble propósito de difundir las doctrinas plasmadas en el texto de aquella obra (Vargas, 2022). Asimismo, ampliando la investigación a propósito de esta obra, recientemente se ha publicado un estudio que describe el sorpresivo hallazgo del texto de aquellas *Lecciones de derecho administrativo*, una rareza bibliográfica del siglo XIX considerada como el primer libro escrito sobre esta disciplina en Latinoamérica; a cuyo efecto se indaga brevemente acerca de las circunstancias de su aparición y las repercusiones que tuvo aquel libro en su lugar de origen, México, para luego enfatizar su adopción como texto de enseñanza en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia, destacando su influencia en el desarrollo posterior de la disciplina durante el siglo XX hasta la elaboración de nuevos estudios al comienzo del siglo XXI (Vargas, 2023).



#### 4.1. Las nuevas fuentes a considerar en el estudio del Derecho Administrativo

En la diversidad de textos publicados sobre esta materia en Bolivia, generalmente se señala que las fuentes del Derecho Administrativo son las mismas establecidas para todo el derecho. Así, el profesor Dermizaky (1988), en su obra publicada originalmente en 1985, consideraba, por ejemplo, que las fuentes del Derecho Administrativo son las mismas que las del derecho en general, vale decir, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, con el siguiente aditamento: "[...] cabe agregar los tratados internacionales, cuando de alguna manera afectan a la Administración Pública" (p. 31), lo que demuestra que, hasta aquel tiempo, los tratados internacionales —como parte del ordenamiento jurídico por su rango legal— solo tenían una leve influencia y relativa utilidad para los estudios de derecho administrativo en nuestro país.

Sin embargo, considero que, de acuerdo con las normas previstas en la Constitución boliviana aprobada en 2009 —que tienen incidencia directa en esta materia en virtud del fenómeno de la "constitucionalización del ordenamiento jurídico"—, y conforme a los avances de esta disciplina, dedicada específicamente al estudio de la organización y funcionamiento de la Administración Pública en sus relaciones con los administrados, actualmente se trata de una rama especial del derecho público cuyo fundamento indispensable radica en la Constitución y en las normas del Bloque de Constitucionalidad. Esto implica que sus fuentes son notablemente diferentes de las clásicamente señaladas para el derecho en cualquiera de sus ramas.

En efecto, se debe tener en cuenta que, en la actualidad, nos encontramos frente a un proceso de constitucionalización de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución, en palabras de Guastini (2001):

[...] es una Constitución invasora, que condiciona la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, la acción de los gobernantes y gobernados, y que ha dado lugar al nacimiento de un nuevo paradigma de Estado, el Estado Constitucional de Derecho, en el que se apuesta por Constituciones con fuerte contenido normativo, y a la vez garantizadas. (p. 153)

Son *Constituciones normativas* porque tienen un vasto programa normativo, con principios, valores, amplios catálogos de derechos y garantías, y no simplemente con reglas sobre las fuentes de producción normativa y reglas del juego. Son *Constituciones garantizadas* porque existe un órgano jurisdiccional para hacer valer las normas constitucionales, frente a su lesión, a través de los mecanismos de protección previstos en la misma Constitución. Debe añadirse que la existencia de una jurisdicción especializada para el control de constitucionalidad, no impide que la jurisdicción ordinaria proteja los derechos fundamentales y garantías constitucionales (Sentencia del TCP 0982/2010-R).

Precisamente, la Constitución (2009) —que al presente ya ha cumplido más de una década de vigencia— se caracteriza por ser una Constitución normativa y ampliamente garantista.

En síntesis, como afirma Prieto Sanchis (2002), el Estado Constitucional representa una fórmula mejorada del Estado de Derecho, pues se busca no sólo el sometimiento a la ley, sino a la Constitución, que queda inmersa dentro del ordenamiento jurídico como una norma suprema:

Los operadores jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que lo hacen directamente, y, en la medida en que aquella disciplina [regula] numerosos aspectos sustantivos, ese acceso se produce de manera permanente, pues es difícil encontrar un problema jurídico medianamente serio que carezca de alguna relevancia constitucional. (p. 119)<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> La Sentencia del TCP 1058/2010 dispone:

En este marco, todos los órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) y las funciones estatales, están sometidas a las normas de la Constitución Política del Estado, que se constituye en el fundamento final de toda la actividad estatal, dentro de ella, claro está, la administrativa. En ese sentido, el resto del ordenamiento jurídico, entre ellas la ley, debe desarrollar coherentemente los mandatos constitucionales para guardar armonía con los principios, valores, derechos y garantías que

De lo señalado, se colige que en un Estado Constitucional de Derecho —que constituye la base sobre la cual se erige el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y con Autonomías en Bolivia—, tanto gobernantes como gobernados deben someterse al imperio de la Constitución, a fin de que no sean las actuaciones meramente discrecionales —o caprichos personales— las que se impongan en el desarrollo de sus actividades públicas. Lo contrario implicaría desconocer lo previsto por la normativa vigente, vulnerando así el principio de seguridad jurídica (Sentencia del TCP 0270/2012 de 4 de junio).

En este sentido, la constitucionalización de la Administración Pública en general, y del Derecho Administrativo en particular, significa concretamente que tanto la parte axiológica y dogmática como la parte orgánica de la Ley Fundamental, son plenamente aplicables en el ejercicio de la función pública y de las actividades administrativas<sup>16</sup>.

Además, en virtud del principio de aplicación directa de la Constitución (2009, art. 109), los derechos fundamentales tienen incidencia directa en el ámbito del Derecho Administrativo. Igualmente, las fuentes de producción y de conocimiento de esta disciplina poseen ahora un orden de prelación y alcances muy distintos. Entre ellas se encuentran, por ejemplo: la Constitución —que establece los principios que rigen la Administración Pública—; los Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos —que forman parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad y son de aplicación preferente y obligatoria—; la Jurisprudencia Constitucional —que, con carácter vinculante, ha interpretado diferentes normas del procedimiento administrativo—; la historia —que, a través de diversos documentos y actuaciones, ha establecido las bases de esta disciplina jurídica—; y también la doctrina administrativa, con sus notables avances a nivel iberoamericano en la actualidad.

## 4.2. La Constitución (2009)

Es la fuente por excelencia del Derecho en general y del Derecho Administrativo en particular, dado que constituye la base de todo el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. La razón de esta afirmación radica en que todo el orden jurídico y político, personificado en el Estado, se halla conformado por una superestructura integrada por distintas normas jurídicas que se organizan en diversos niveles. Ello implica, desde un punto de vista técnico, la existencia de una jerarquía normativa —o “pirámide jurídica”— esencial en la estructura jurídica estatal, en cuya cúspide se encuentra la Constitución.

Esta ocupa una posición preferente y opera como norma principal, directora y fundamentadora de todas las demás normas del ordenamiento jurídico y político del Estado, calidad inherente a su naturaleza y conocida como principio de supremacía constitucional (Constitución, 2009, art. 410-II). Ambos conceptos constituyen el contenido principal de la Constitución vigente.

Asimismo, cabe precisar que la Constitución es la Ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, y consigna normas que regulan el sistema constitucional —es decir, la forma en que se organiza y estructura el Estado y sus instituciones— en su triple dimensión: axiológica, dogmática y orgánica. Esto supone la proclamación de los valores supremos y principios fundamentales, la consagración de los

---

proclama la Ley fundamental. Dentro de ese ámbito, una de las funciones estatales previstas en la Constitución Política del Estado es la de defensa de la sociedad, que en el marco del sistema constitucional vigente, se halla a cargo de dos instituciones: La defensoría del pueblo (art. 218 y ss) y el Ministerio Público (art. 225 y ss); última institución destinada a la defensa de la legalidad y de los intereses general de la sociedad y al ejercicio de la acción pública; institución que tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. En el marco de la Constitución abrogada, el Ministerio Público también estaba concebido como una Institución de defensa de la sociedad (art. 124 y ss.); sin embargo, su finalidad abarcaba no sólo la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad, sino también los intereses del Estado; última función que, en el marco de la Constitución vigente, será cumplida por la Procuraduría General del Estado, de conformidad al art. 229 y ss., de la CPE”.

<sup>16</sup> Al respecto, cabe tener presente que la **Declaración Constitucional Plurinacional 0003/2013**, de 25 de abril, estableció que, de acuerdo a la teoría constitucional, existe una diferencia sustancial entre la parte dogmática de la Constitución y su parte orgánica, por lo que: “debe precisarse que la **parte dogmática** de la Constitución, se caracteriza por su directa aplicación, es decir, que su materialización no necesita ley de desarrollo previa; por el contrario, merced al principio de legalidad, que constituye uno de los pilares esenciales para el ejercicio de la función pública, la **parte orgánica** de la Constitución, para su aplicación, necesita leyes expresas de desarrollo, las cuales deben emanar de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

derechos y garantías constitucionales de las personas, así como la delimitación de la estructura social, económica, financiera, jurídica y política.

En este sentido, se define la forma de Estado y el régimen de gobierno, se establecen los órganos a través de los cuales se ejerce el poder político y se determinan sus miembros, los mecanismos de elección o designación y las funciones, atribuciones y competencias de cada órgano.

Es una Ley Suprema porque se sitúa por encima de toda otra disposición legal del ordenamiento jurídico del Estado. Asimismo, es una Ley Fundamental, dado que las disposiciones legales ordinarias emanadas de los órganos legislativo y ejecutivo, así como los actos y resoluciones de las máximas autoridades de las entidades territoriales autónomas y de las autoridades públicas —judiciales o administrativas—, tienen su fundamento y fuente de legitimación en las normas de la Constitución (Rivera, 2006, p. 44).

En palabras del profesor Dermizaky (2004), “[...] la Constitución es la Norma Suprema o Ley Fundamental de un país, que determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o sistema de su gobierno y los derechos y deberes de la población” (p. 47). Por ello, la Constitución Política del Estado (2009) debe considerarse en todo momento como una fuente fundamental del Derecho Administrativo. Es así porque, en sus normas, se hallan inscritos valores supremos y principios ético-morales aplicables tanto a gobernantes como a gobernados (art. 8), los cuales, junto con otros principios fundamentales —legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados—, rigen obligatoriamente la actividad de la Administración pública y las funciones de los servidores públicos (arts. 232 y ss.).

Asimismo, la Constitución (2009), establece la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Ejecutivo (arts. 165 y 172), sus ministerios (art. 175 y ss.), instituciones como la Contraloría y la Procuraduría General del Estado (arts. 213 y 229, respectivamente), así como las principales atribuciones de las autoridades públicas y competencias de los distintos niveles de gobierno (art. 297 y ss.). Sus preceptos también permiten la generación y reelaboración de normas, siguiendo el procedimiento legislativo establecido por la Ley Fundamental (art. 163) y respetando la jerarquía normativa prevista en su artículo 410. II.

Entonces, la premisa esencial para el estudio del Derecho Administrativo en nuestro país debe ser la siguiente:

*La Constitución (2009), en la medida que contiene normas jurídicas de aplicación directa (artículo 109.I) y de cumplimiento obligatorio (artículo 410.I), junto a las normas que integran el Bloque de constitucionalidad, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general y del Derecho Administrativo en particular. Se erige como la base y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico que regula la actividad administrativa estatal, al englobar normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro ineludible de validez formal —de procedimiento— y material —de contenido— de todas las disposiciones legales que conforman el orden normativo de la Administración pública del Estado, en sus niveles nacional, departamental y municipal-.*

#### **4.3. Los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos**

También debe considerarse que, a diferencia de otras disciplinas, en materia administrativa los tratados y convenciones internacionales —especialmente aquellos que consagran derechos humanos y prevén mecanismos para garantizar su efectividad frente a cualquier autoridad, judicial o administrativa—

adquieren un carácter especial. Es así porque, por mandato constitucional, estos forman parte del Bloque de Constitucionalidad, lo que implica que gozan de aplicación preferente y son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades públicas. Por ello, constituyen una fuente imprescindible para el estudio del Derecho Administrativo.

Sobre la importancia de estos instrumentos internacionales, el profesor boliviano Asbún (2007) considera que los tratados y convenciones suscritos entre dos o más Estados, o entre estos y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) u organismos regionales de integración como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR, desempeñan un papel especialmente relevante. Esto es particularmente cierto ante los crecientes procesos de integración entre países y la constante búsqueda de mecanismos más efectivos para garantizar la plena vigencia y protección de los derechos humanos, aunque en algunos casos se requieran leyes expresas para otorgar plena validez a los tratados dentro de un Estado<sup>17</sup>.

#### 4.3.1. El valor jurídico de los tratados internacionales en Bolivia

De la revisión de los antecedentes constitucionales de Bolivia, se puede señalar que la Constitución Política del Estado (1967), vigente desde 1967 y con reformas en 1994 y 2004, no contenía disposiciones expresas sobre este aspecto. Sin embargo, los trámites relacionados con la ratificación y puesta en vigencia de los tratados internacionales estaban sujetos a los mismos procedimientos que la aprobación de las leyes: requerían la sanción del H. Congreso Nacional y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. En consecuencia, era mediante una "Ley de la República" que el Congreso aprobaba los tratados o convenciones internacionales, otorgándoles, de manera implícita, la misma jerarquía que una ley ordinaria —naturalmente, con la necesaria promulgación posterior por parte del presidente de la República—.

En la actualidad, la Constitución (2009), en su artículo 410.II, además de proclamarse como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano —con primacía frente a cualquier otra disposición—, establece el Principio de Jerarquía Normativa, situándose en la cúspide de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia como fundamento de todas las demás normas. En segundo lugar, se ubican los tratados internacionales que pueden suscribirse en diversas materias —como extradición, asilo diplomático, integración regional o sudamericana (MERCOSUR), cooperación judicial internacional, entre otras— por las autoridades legitimadas, "en función de la soberanía y los intereses del pueblo" (artículo 255.I). Es así porque, una vez ratificados, estos tratados forman parte del ordenamiento jurídico con rango de ley (Constitución, 2009, art. 257.I).

En cambio, la situación de los *Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos* es muy diferente, ya que, una vez ratificados, prevalecen en el orden interno. Es así porque los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse conforme a ellos (Constitución, 2009, art. 13.IV) y, cuando dichos tratados declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta, vale decir, que los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables (Constitución, 2009, art. 256).

---

<sup>17</sup> Al respecto, Asbún (2007) dice:

Ello justifica el inusitado debate que se ha desarrollado a la hora de las reformas constitucionales para incorporar alguna previsión expresa sobre los tratados, habiéndose asignado a los mismos desde jerarquía constitucional, pasando por un nivel superior a la ley y en otros casos se les ha otorgado nivel normativo similar que éstas. A manera de ejemplo puede citarse, que la Constitución de Argentina en el párrafo segundo del artículo 22, señala que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y otros tratados expresamente citados) en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, y las Constituciones de Costa Rica y Honduras, establecen una jerarquía superior del tratado frente a la ley; y la Constitución de El Salvador afirma que los tratados constituyen leyes de la República" (p. 26).

Actualmente, cabe destacar que la Constitución boliviana de 2009 prevé normas expresas sobre la aprobación y ratificación de los tratados internacionales, especificando además la jerarquía que tienen aquellos referidos a la vigencia de derechos humanos.

En este sentido, la Sentencia del TCP 1617/2013, de 4 de octubre, ha establecido que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales ocupan un lugar preeminente en el orden constitucional. En Bolivia, esto se refleja no solo en el amplio catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales consagrados, sino también en los fines y funciones esenciales del Estado, siendo uno de ellos el de “Garantizar el cumplimiento

de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” (Constitución, 2009, art. 9.4).

Asimismo, se observa esta preeminencia en el hecho de que los criterios de interpretación de los Derechos Humanos constitucionalizados deben ser utilizados no solo por el juez constitucional, sino también por los jueces y tribunales de las diferentes jurisdicciones previstas en nuestra Ley Fundamental. Según lo entendió la Sentencia del TCP 0112/2012, estos jueces y tribunales se constituyen en los garantes primarios de la Constitución y de los derechos y garantías fundamentales.

Esta obligación incluye también a las diferentes autoridades públicas —elegidas por voto popular— y a otras autoridades administrativas de las distintas instituciones del Estado, quienes, en todo momento y durante el ejercicio de sus funciones, deben tener presentes las siguientes pautas de interpretación:

Así, deben mencionarse a los arts. 13 y 256 de la CPE, que introducen dos principios que guían la interpretación de los derechos fundamentales: La interpretación pro persona (pro homine) y la interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. En virtud a la primera, los jueces, tribunales y autoridades administrativas, tienen el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en cuestión —ya sea que esté contenida en la Constitución o en las normas del bloque de constitucionalidad— y de adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al derecho en cuestión; y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de —ejerciendo el control de convencionalidad— interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificado o a los que se hubiere adherido el Estado, siempre y cuando, claro está, declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución; obligación que se extiende, además al contraste del derecho con la interpretación que de él ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo ha entendido la misma Corte en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. (Sentencia del TCP 1617/2013)

A estos criterios de interpretación debe añadirse el principio de *progresividad*, que se desprende del artículo 13 de la Constitución (2009), así como la *directa justiciabilidad de los derechos* prevista en el artículo 109 de la Ley Fundamental. Esta norma establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, constituyéndose en una concreción del carácter normativo de la Constitución Política del Estado, y en una de las características fundamentales del Estado Constitucional. El *principio de aplicación directa de los derechos*, como sostuvo la Sentencia del TCP 0121/2012 de 2 de mayo, establece:

[...] constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la ‘última generación del Constitucionalismo’, en el cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica.



En complemento de lo anterior, la Constitución (2009) dispone expresamente que: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” (art. 14.III). De ello se infiere que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Norma Suprema, ha decidido otorgar a los tratados y convenciones internacionales que consagran derechos humanos una jerarquía constitucional con aplicación preferencial, en beneficio de los ciudadanos. De esta manera, se constituye un bloque de constitucionalidad en Bolivia, conforme a lo establecido en la misma CPE, la cual dispone expresamente que: “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país (...)” (Constitución, 2009, artículo 410.II).

En complemento de lo anterior, la misma Constitución también dispone expresamente que: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” (Constitución, 2009, art. 14.III), de lo cual se puede inferir que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Norma Suprema, ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de los ciudadanos<sup>18</sup>, conformando así un perfecto *bloque de constitucionalidad* en Bolivia de acuerdo a lo establecido en la misma CPE, misma que dispone expresamente que: “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. [...]” (Constitución, 2009, art. 410.II).

#### **4.3.2. El desarrollo jurisprudencial del bloque de constitucionalidad**

Se debe considerar que el Tribunal Constitucional de Bolivia, en los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia 0045/2006 de 2 de junio, señaló que “la teoría del bloque de constitucionalidad se originó en Francia y se extendió posteriormente a los países europeos, siendo luego asimilada en Latinoamérica”. Esta teoría sostiene que aquellas normas que no forman parte del texto constitucional pueden integrarse a un conjunto de preceptos que, por sus cualidades intrínsecas, deben utilizarse para evaluar la constitucionalidad de una norma legal. De esta manera, las jurisdicciones constitucionales incorporan, para realizar el análisis valorativo o comparativo, normas adicionales a la Constitución, a las cuales se concede un valor suprallegal que las convierte en parámetros de constitucionalidad.

Así, en Bolivia, la jurisdicción constitucional ha desarrollado el bloque de constitucionalidad en la Sentencia del TC 1420/2004-R, de 6 de septiembre, estableciendo lo siguiente:

[...] conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre [...] derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución.

Dicho entendimiento ratifica lo desarrollado previamente en la Sentencia del TC 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la cual se expresó lo siguiente:

[...] este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación

<sup>18</sup> Un análisis crítico sobre las disposiciones contenidas en la nueva Constitución Boliviana que fue aprobada el año 2009 puede encontrarse en Rivera (2008).

directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional existente, se deduce que **el bloque de constitucionalidad en Bolivia lo conforman, además del texto de la Constitución, los tratados, declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por el país** (Sentencias del TC 0045/2006 y 0069/2006, entre otras). En consecuencia, no todo tratado, declaración, convención o instrumento internacional forma parte del bloque de constitucionalidad, sino únicamente aquellos que, habiendo sido previamente ratificados por el Estado boliviano, estén destinados a la promoción, protección y vigencia de los derechos humanos, constituyéndose así en un parámetro efectivo de constitucionalidad.

Ampliando estos avances jurisprudenciales y en relación con la incidencia de las normas provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico boliviano, el Tribunal Constitucional ha procedido a un redimensionamiento del bloque de constitucionalidad, sosteniendo que los elementos normativos y las decisiones jurisdiccionales que emanen de dicho sistema no son aislados ni independientes del sistema legal interno:

En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad (...) (Sentencia del TCP 110/2010-R).

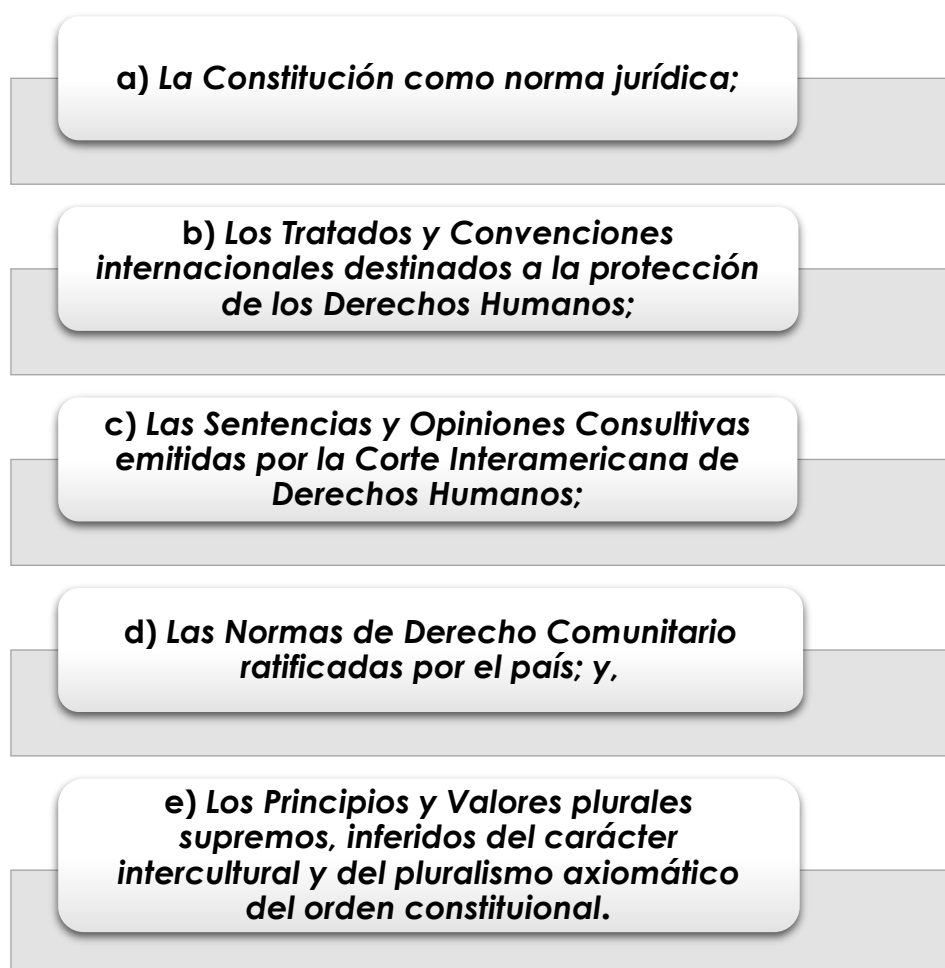
Por otro lado, en el marco de una interpretación progresiva acorde con el principio de unidad constitucional y en consonancia con las directrices principistas del Estado Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que los **valores supremos y plurales del Estado Plurinacional de Bolivia** —como el *vivir bien*, la *solidaridad*, la *justicia*, la *igualdad material*, entre otros señalados en la Constitución— también forman parte del bloque de constitucionalidad en un componente adicional, el cual se encuentra respaldado por el principio de supremacía constitucional (Sentencia del TCP 1227/2012).

En el mismo sentido, y precisando los alcances del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que **deben incorporarse al mismo todas las sentencias, opiniones consultivas y demás decisiones emanadas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como parte del referido sistema supranacional de protección de derechos humanos**. Esta conclusión interpretativa ya había sido asumida por el propio Tribunal (Sentencia del TCP 0137/2013).

En definitiva, y siguiendo una interpretación sistemática, extensiva y coherente con el valor axiológico de la Constitución, conforme a lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional, se puede concluir que, actualmente, el bloque de constitucionalidad vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia está compuesto —de manera enunciativa y no limitativa— por los siguientes elementos:

**Figura 1:**

*Composición del bloque de constitucionalidad en Bolivia*



*Fuente: Vargas (2018).*

#### **4.4. La Legislación**

Desde un punto de vista jurídico, *la ley es aquella regla o norma que rige la conducta social de las personas en forma general y de modo obligatorio*, siendo impuesta por autoridad cuya competencia es determinada por la misma sociedad, y que para su cumplimiento está acompañada de la coacción y la coerción.

Ciertamente, en las primeras etapas del desarrollo del Estado, las normas consuetudinarias, generadas de manera espontánea en la sociedad sin un legislador conocido, fueron consideradas dentro del ámbito de la potestad estatal, es decir, declaradas como producto de la voluntad estatal y formalizadas

mediante su dictación o formulación escrita. Entre estas normas surgieron aquellas referidas a la afirmación del Estado, su organización, sus potestades, sus miembros y las relaciones entre estos, así como al reconocimiento de sus libertades. Por ello, la ley en general, y las leyes constitucionales en particular, constituyen también una fuente muy importante del Derecho (Valencia, 1985, p. 15)<sup>19</sup>.

En todo caso, debe considerarse como fuente del Derecho Administrativo la ley sustancial y no únicamente la ley formal. Esto significa que, además de las normas sancionadas por el Órgano Legislativo, deben tomarse en cuenta también aquellas emitidas por el Órgano Ejecutivo, en virtud de la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, los decretos supremos, los reglamentos de ejecución y otros actos administrativos (Dermizaky, 1999).

Actualmente, las disposiciones legales, para alcanzar plena validez formal y material, no solo deben cumplir con la formalidad de ser emitidas por la autoridad competente (Órgano Legislativo) de acuerdo con un procedimiento legislativo expresamente previsto, sino que también deben adecuarse a las normas de la Constitución y ser compatibles con el sistema de valores supremos y principios fundamentales que estructuran el Estado Constitucional de Derecho<sup>20</sup>. Además, deben respetar los derechos y garantías constitucionales, cuya interpretación se realiza conforme a los tratados y convenios internacionales, y cuya vigencia no puede ser afectada por normas de rango inferior.

#### 4.4.1. Las Leyes constitucionales y políticas

Entre las distintas clases de leyes promulgadas por el Estado nos interesan las denominadas leyes constitucionales y políticas. Estas normas reglamentan en detalle algunos aspectos sustantivos de la organización del Estado y de sus principales instituciones, los cuales, por su extensión y especificidad, generalmente no pueden integrarse directamente al texto constitucional.

Es el caso, por ejemplo, de las cinco leyes que la misma Constitución (2009) encargó al legislador para su pronta aprobación. De ahí que, a través de su Disposición Transitoria Segunda, ordenó que: "La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización".

<sup>19</sup> Al respecto, se debe considerar también que estas normas "en tanto están dotadas de una particular fuerza normativa que obliga a los ciudadanos y a las autoridades a su cumplimiento, porque en términos generales, instrumentalizan y buscan hacer efectivos los principios contenidos en la Constitución, son fuentes del Derecho Constitucional" (Asbún, 2007, p. 27).

<sup>20</sup> En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Bolivia respecto de la inconstitucionalidad de las leyes y, a través de la jurisprudencia contenida en la **Sentencia Constitucional 0009/2003 de 3 de febrero**, ha establecido lo siguiente:

Que, este Tribunal, conforme a la doctrina del Derecho Constitucional, ha establecido en su jurisprudencia que una norma puede ser inconstitucional por la forma o por el fondo. En el primer caso cuando en su elaboración, sanción y promulgación se infringe el procedimiento legislativo previsto en la Constitución; y en el segundo cuando su contenido es el que vulnera los mandatos de la Ley Fundamental. Así se ha entendido a partir de la SC 082/2000 de 14 de noviembre que dice: "conforme lo ha precisado la doctrina constitucional una disposición legal puede ser impugnada de inconstitucional por su origen o por su contenido. En el primer caso, cuando en su elaboración y aprobación no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la Constitución para tal efecto. En el segundo caso, cuando la disposición legal, a pesar de haber sido elaborada y aprobada conforme a los procedimientos y formas establecidos por el texto constitucional contiene normas que son incompatibles con los principios y normas de la Constitución Política del Estado." Que, en un Estado Democrático de Derecho, el procedimiento legislativo que da validez constitucional a una Ley material no se reduce a las diferentes fases o etapas que el legislador debe seguir para la formación de una Ley, desde la presentación del proyecto hasta la promulgación y publicación, que en el Sistema Constitucional boliviano están previstas en el Título IV, Parte Segunda, Capítulo V, arts. 71 al 81 de la Constitución, al contrario comprende también las condiciones de validez del acto legislativo, es decir, que el órgano emisor de la Ley sea competente y desarrolle el procedimiento de elaboración de una determinada Ley, como en el presente caso, en el marco de las normas previstas para su legal funcionamiento.

En virtud de lo anterior, las cinco leyes vigentes que actualmente regulan la estructura, organización y funcionamiento institucional del Estado Plurinacional con Autonomías son las siguientes:

- La **Ley del Órgano Electoral Plurinacional (2010)** (LOEP) tiene por objeto normar el ejercicio de la función electoral, jurisdicción, competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, servicios y régimen de responsabilidades del Órgano Electoral Plurinacional, para garantizar la democracia intercultural en Bolivia.
- La **Ley del Órgano Judicial (2010)** (LOJ) tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial, considerado como un órgano del poder público. Este se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, posee igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral, y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación.
- La **Ley del Régimen Electoral (2010)** (LRE) tiene por objeto regular el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia Intercultural, la misma que está basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia<sup>21</sup>.
- La **Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (2010)** (LTCP) tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como establecer los procedimientos aplicables a los asuntos bajo su competencia y a las acciones de conocimiento de los jueces y tribunales de garantías constitucionales, quienes están llamados a precautelar el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales. Sin embargo, esta última parte procesal de la Ley ha quedado sin efecto a partir de la puesta en vigencia de la Ley N.º 254, que aprueba el Código Procesal Constitucional.
- La **Ley del Marco de Autonomías y Descentralización (2010)** (LMAD) tiene por objeto regular el régimen de autonomías, en cumplimiento del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado, así como las bases de la organización territorial del Estado establecidas en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

#### 4.4.2. Leyes Formales y Materiales en vigencia

No obstante, en el ámbito administrativo existe una diversidad de leyes indispensables para conocer **el régimen legal vigente en la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles: nacional, departamental y municipal**. Igualmente, están las normas que rigen la actividad de los servidores públicos que forman parte de dichas entidades, a fin de determinar los alcances de su responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

a) Así, por ejemplo, entre las leyes formales que provienen de la Asamblea Legislativa Plurinacional —es decir, aquellas que fueron sancionadas y promulgadas conforme al procedimiento legislativo previsto en la Constitución y que regulan la organización y funcionamiento de las entidades públicas que ejercen funciones jurídico-administrativas—, pueden citarse las siguientes:

- Ley del Defensor del Pueblo.
- Ley de Minería y Metalurgia.

<sup>21</sup> El Tribunal Supremo Electoral ha publicado el *Compendio normativo de la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales*, el cual contiene las principales normas y reglas que establecen el marco jurídico de los comicios electorales con el objetivo de facilitar la consulta por parte de todos los actores que intervienen en la competencia: las organizaciones políticas, sus militantes, candidatos y delegados; también la de quienes colaboran con el órgano electoral desplegándose en el territorio, como jueces, notarios, guías o jurados; igualmente de quienes siguen el proceso, sean observadores internacionales o bolivianos, medios de comunicación o centros académicos. El compendio está disponible en Órgano Electoral Plurinacional (2021).



- Ley N.º 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, destinada a aquellas entidades territoriales autónomas municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y que también regula lo que no hubiera sido legislado en el ámbito de sus competencias.
- Ley N.º 165 General de Transporte.
- Ley N.º 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
- Ley N.º 031 de Marco de Autonomías y Descentralización, que regula el régimen de autonomías, los tipos de autonomía, el procedimiento de acceso, la elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, el régimen competencial y económico-financiero, la coordinación entre niveles de gobierno y el marco general de la participación y el control social.
- Ley N.º 3545 de Reconducción Comunitaria, modificatoria de la Ley N.º 1715, de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
- Ley N.º 3058 de Hidrocarburos.
- Ley N.º 2492 Código Tributario Boliviano.
- Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo, que regula el procedimiento aplicable a las actuaciones de la Administración Pública.
- Ley N.º 2027 del Estatuto del Funcionario Público, que regula las relaciones de los servidores públicos con el Estado, estableciendo sus derechos, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, incentivos y sanciones.
- Ley N.º 1874 de Concesiones de Obras Públicas de Transporte.
- Ley N.º 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que norma la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que está encargado de la dotación, distribución y reagrupamiento de la propiedad agraria.
- Ley N.º 1700 Forestal, que regula el aprovechamiento de los recursos forestales.
- Ley N.º 1604 de Electricidad.
- Ley N.º 1600 del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), que regula los sectores de electricidad, transporte, agua, telecomunicaciones, minería e hidrocarburos.
- Ley N.º 1333 del Medio Ambiente.
- Ley N.º 1178 de los Sistemas de Administración, Fiscalización y Control Gubernamentales (SAFCO), que regula los sistemas de administración y control de los recursos públicos y establece la responsabilidad de todo servidor público.
- Ley de Expropiación.

**b)** Así también entre las **leyes materiales**, que son aquellas normas de alcance general, obligatorias y coercibles que pueden emanar de cualquiera de los órganos del poder público —como los decretos reglamentarios que rigen la actividad administrativa de las entidades públicas—, se pueden citar las siguientes:

- **Decreto Supremo N.º 0181**, de 28 de junio de 2009, que establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para el sector público<sup>22</sup>.
- **Decreto Supremo N.º 0071**, de 9 de abril de 2009, que elimina las superintendencias generales y sectoriales y crea las autoridades de fiscalización y control social en los sectores de transportes y telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, electricidad, bosques y tierra, pensiones y empresas; asimismo, determina su estructura organizativa y define sus competencias.

<sup>22</sup> Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha publicado un documento digital del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de junio de 2009, denominado *Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios* (NB-SABS), en un texto compilado y actualizado hasta la gestión 2023 y disponible en Ministerio de Economía y Finanzas (2023).

- **Decreto Supremo N.º 29894**, de 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional.
- **Decreto Supremo N.º 29215**, de 2 de agosto de 2007, reglamentario de la Ley N.º 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley N.º 3545 de Reconducción Comunitaria.
- **Resolución Suprema N.º 225558**, de 1 de diciembre de 2005, que regula el Sistema de Presupuesto.
- **Resolución Suprema N.º 225557**, de 1 de diciembre de 2005, que regula el Sistema de Programación de Operaciones para las entidades estatales.
- **Resolución Suprema N.º 222957**, de 4 de marzo de 2005, que regula el Sistema de Contabilidad Integrada.
- **Decreto Supremo N.º 27310**, de 9 de enero de 2004, reglamentario de la Ley N.º 2492, Código Tributario Boliviano.
- **Decreto Supremo N.º 27113**, de 23 de julio de 2003, reglamentario de la Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo.
- **Decreto Supremo N.º 26115**, de 16 de marzo de 2001, que regula el Sistema de Administración de Personal.
- **Decreto Supremo N.º 25749**, de 20 de abril de 2000, reglamentario de la Ley N.º 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
- **Decreto Supremo N.º 25134**, de 21 de agosto de 1998, del Sistema Nacional de Carreteras.
- Otras resoluciones supremas emitidas por los respectivos ministerios de Estado (Martínez, 2018, pp. 76-80).

#### 4.5. La Jurisprudencia

La palabra *jurisprudencia*, de manera general, se refiere a la doctrina sentada por los máximos tribunales de justicia en sus decisiones, por cuya razón debe entenderse como una fuente principal del derecho. En otras palabras, los fallos y sentencias emitidos por los jueces y tribunales supremos en última instancia conforman la jurisprudencia, cuyas orientaciones sirven de base para legislar y para administrar justicia en casos análogos. En consecuencia, los fallos que determinan la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y otras resoluciones aplicables en el ámbito administrativo o que se refieren a la legalidad de las actuaciones de las entidades públicas forman la jurisprudencia aplicable en materia administrativa, dado que constituyen una fuente directa del derecho.

En concordancia con lo anterior, Asbún (2007) señala que los tribunales superiores de justicia, comúnmente denominados *Cortes Supremas* o *Tribunales Supremos de Justicia*, aplican las leyes a los casos concretos que son sometidos a su conocimiento, en el marco de sus competencias, resolviéndolos a través de fallos o sentencias que, cuando contienen un entendimiento continuo y uniforme, reciben la denominación de jurisprudencia. Es decir, los tribunales, al resolver los procesos que les corresponde conocer, fijan el sentido de las normas y, en consecuencia, estos entendimientos pasan a constituirse en directrices para el resto de los administradores de justicia<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> El ordenamiento jurídico civil aplicable en la jurisdicción ordinaria, en referencia a la cosa juzgada, establece la regla de la relatividad de las sentencias, es decir, que la misma no surte efectos sino entre las mismas partes y no daña ni aprovecha a terceros; y por su parte, el procedimiento civil determina que ningún juez puede excusarse de fallar en las causas sometidas a su juzgamiento bajo pretexto de falta, oscuridad e insuficiencia de la ley, debiendo siempre pronunciar sentencia según los principios generales del derecho, la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado o, en su caso, aplicando por analogía las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurra. Al respecto, Romero Sandoval (1983) expresa:

Frente a todas estas disposiciones ¿puede hablarse de la jurisprudencia como fuente del Derecho? Sí, porque el Juez al aplicar una norma general (la ley) crea otra norma jurídica individualizada (la sentencia); por otra parte, los casos particulares fallados por los jueces, cuando adquieren cierta uniformidad, pierden su sentido de casos aislados, desaparecen las personas de los

Eso es lo que sucede, por ejemplo, con la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia que, a través de su Sala Contenciosa Administrativa, emite autos supremos en los que interpreta las disposiciones que rigen la tramitación de los procesos contenciosos y contencioso-administrativos, resolviendo cada caso conforme a sus particularidades y efectuando la interpretación de la legalidad ordinaria de acuerdo con las normas vigentes. Todo ello se halla compilado en los *Resúmenes de Jurisprudencia* que publica anualmente dicho tribunal, cuyos entendimientos tienen una enorme relevancia para coadyuvar a la comprensión de las normas que son objeto de estudio del Derecho Administrativo<sup>24</sup>.

### 3.5.1. El valor de la Jurisprudencia Constitucional

Ahora bien, la jurisprudencia puede ser emitida en los distintos ámbitos del Derecho; sin embargo, existe un tipo muy peculiar que, por las características de su contenido, produce efectos vinculantes y obligatorios en su aplicación, dado que emana del órgano encargado de administrar justicia constitucional en Bolivia, considerado el máximo guardián de la Constitución y del Bloque de Constitucionalidad: el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este tribunal tiene a su cargo: a) velar por la supremacía de la Constitución; b) ejercer el control plural de constitucionalidad; y c) precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Para cumplir dichas funciones, realiza una constante labor de interpretación de la Constitución, plasmando su sentido y alcance en cada una de las sentencias constitucionales que emite, conformando así lo que se denomina *jurisprudencia constitucional*<sup>25</sup>.

En este sentido, la **Sentencia del TC 1781/2004-R** ha explicado **la posición de la jurisprudencia constitucional en el sistema de fuentes del Derecho**; al respecto, ha destacado que la doctrina constitucional contemporánea otorga un lugar esencial a la jurisprudencia como fuente directa del Derecho, razón por la cual se constituye en vinculante y obligatoria para el resto de los órganos del poder público, particularmente para los jueces y tribunales que integran el Órgano Judicial. Su base y fundamento radican en la fuerza de la cosa juzgada constitucional que el Constituyente confiere a las sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional (Constitución, 2009, art. 203), tanto en su parte resolutive o *decisum* como en los fundamentos jurídicos que guardan una unidad de sentido con aquella, de modo que no pueda entenderse esta parte sin aludir a los primeros; es decir, la *ratio decidendi* o razón de la decisión.

Posteriormente, la **Sentencia del TCP 0846/2012** tras realizar un recorrido por la jurisprudencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional anterior, el Tribunal Constitucional transitorio y el Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyó en las siguientes subreglas, normas adscritas o normas concretas de la sentencia, que desarrollaron el **Derecho jurisprudencial** en sus diversas comprensiones.

#### Sobre el valor de la jurisprudencia constitucional

---

litigantes y se crea para casos iguales o semejantes una doctrina generalizada, aplicable a los casos restantes que tuviera que conocer el juzgador [denominada Jurisprudencia]" (p. 126).

<sup>24</sup> Hacen varias décadas atrás, Dermizaky (1985) consideraba, por ejemplo, que la jurisprudencia: "Consiste en las resoluciones, instrucciones, circulares y órdenes mediante las cuales interpretan la ley administrativa los tribunales que la aplican y las autoridades competentes [sic]" (p. 30). Efectivamente, la jurisprudencia se forma a través de las distintas resoluciones que adoptan los tribunales ordinarios de última instancia; sin embargo, las mencionadas instrucciones, circulares, órdenes y otros actualmente sólo constituyen mecanismos operativos específicos para llevar adelante la gestión pública de una entidad —que además se emiten circunstancialmente y conforme a las necesidades institucionales—, por lo que mal pueden ser considerados como "jurisprudencia", más aun teniendo en cuenta el significado de la misma, conforme a la explicación que brindamos en estos apuntes.

<sup>25</sup> Como bien precisa el profesor Jorge Asbún (2007), a partir de la formulación kelseniana del Tribunal Constitucional, el valor de la jurisprudencia se ha transformado sustancialmente, dada la naturaleza y el carácter de los fallos que dicta este tipo de instancia jurisdiccional, que tiene por función principal mantener la supremacía constitucional "y ya sea en los procesos de inconstitucionalidad en los que las sentencias tienen efectos generales (*erga omnes*), o en aquellos que tienen efecto únicamente sobre las partes intervinientes... los fundamentos o *ratio decidendi* de las resoluciones constitucionales, tienen fuerza vinculante general, lo que significa que el entendimiento jurídico y el análisis fáctico y su encuadramiento jurídico que realiza el Tribunal Constitucional, sin necesidad de que esa línea jurisprudencial sea repetida o reiterada, obliga al resto de las autoridades públicas a respetar lo expresado por dicha instancia jurisdiccional" (p. 28).

a) La jurisprudencia constitucional tiene valor de fuente directa del Derecho, de ahí que se reconoce su carácter vinculante para los órganos del poder público y particulares (Sentencias del TC 1781/2004-R; y del TCP 1369/2010-R).

b) El respeto y aplicación del precedente constitucional está vinculado al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (Constitución, 2009, arts. 8.II y 14.III) y la garantía de seguridad jurídica (art. 178.I) (Sentencias del TC 0493/2004-R; y 1781/2004-R).

c) La importancia del precedente vinculante es que da coherencia y unidad al sistema jurídico (Sentencias del TC 0457/2004-R; y del TCP 1369/2010-R).

d) El respeto a los precedentes constitucionales, no implica que el Tribunal Constitucional Plurinacional petrifique su jurisprudencia, impidiendo el replanteamiento de problemas jurídicos aparentemente ya resueltos; por el contrario, puede cambiarla, mutarla, siempre que sea con motivación suficiente (Sentencia del TC 1781/2004-R). Sobre este punto, se tiene que uno de los criterios para cambiar la jurisprudencia constitucional: En la medida que los precedentes sean más acordes con los principios, valores, derechos fundamentales, garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional preferirá su fijeza. A contrario sensu, éste Tribunal aperturará su capacidad de cambio cuando no esté acorde a ellos.

### 3.5.2. Las Sentencias Constitucionales.

Las decisiones adoptadas en la Jurisdicción Constitucional tienen una trascendental importancia, dado que, a diferencia de las decisiones de la jurisdicción ordinaria, que ponen fin a litigios entre particulares o entre estos y el Estado, dichas decisiones modifican el ordenamiento jurídico del Estado, delimitan el ámbito de competencias de los órganos del poder público y, en muchos casos, restablecen los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas<sup>26</sup> cuando han sido restringidos o vulnerados. Ahí radica la importancia de la jurisprudencia constitucional en el estudio de las normas del ordenamiento jurídico administrativo.

Entonces, de manera general, se puede indicar que las sentencias constitucionales emitidas por la jurisdicción constitucional son actos procesales que ponen fin a un proceso constitucional determinado, dictadas por un órgano colegiado —llámese Corte, Tribunal o Sala Constitucional— que se constituye en la instancia suprema encargada de ejercer el control de constitucionalidad.

En este sentido —siguiendo el criterio de Rivera (2007)— se puede señalar que la jurisprudencia constitucional es la doctrina establecida por el *Tribunal Constitucional*, en su calidad de *máximo intérprete de la Constitución*, al aplicar la *Ley Fundamental* y las leyes conforme a ella. Al resolver un caso concreto, el Tribunal crea subreglas a partir de la interpretación de las normas implícitas en la Constitución<sup>27</sup> o mediante la integración de las normas del bloque de constitucionalidad.

En ese propósito, desde sus inicios, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre distintos temas relevantes para el estudio del Derecho Administrativo en Bolivia. Así, por ejemplo, en la **Sentencia Constitucional 0757/2003-R**, de 4 de junio —considerada sentencia fundadora de línea

<sup>26</sup> En efecto, a partir de una interpretación de las normas establecidas por la Constitución, así como de la interpretación de las leyes desde y conforme con la Constitución, la jurisdicción constitucional puede anular las leyes, decretos o resoluciones, o puede mantenerlas vigentes, logrando una interpretación acorde con la Constitución; también puede sustituir una norma por otra o adherir a la disposición legal una norma cuya omisión la hacía incompatible con la Constitución —esto en el moderno modelo asumido por varios tribunales constitucionales— (Rivera, 2004).

<sup>27</sup> Al respecto, Rivera (2007) dice:

En definitiva, se podría decir que la jurisprudencia constitucional es una parte de la sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir donde se explicita qué es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas (p. 282).

jurisprudencial y cuyo Magistrado Relator fue el Dr. Willman Ruperto Durán Ribera— se desarrollaron los fundamentos jurídicos sobre la potestad sancionadora de la Administración pública y sobre las garantías del proceso administrativo. En dicha sentencia se estableció, por ejemplo, que “[...] las reglas del debido proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a toda la esfera sancionadora, incluyendo la materia administrativa disciplinaria” (SSCC 787/2000-R, 953/2000-R, 820/2001-R y otras).

Por su parte, la **Sentencia Constitucional 0042/2004**, de 22 de abril, al interpretar los alcances del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso previstos en la Constitución, dejó establecido que:

Por consiguiente, de la normativa citada que conforma el bloque de constitucionalidad y las sub reglas establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el debido proceso, se infiere que **toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa**, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho *pro actione* ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad<sup>28</sup>.

Asimismo, a través de la **Sentencia Constitucional 1464/2004-R, de 13 de septiembre**<sup>29</sup> —Sentencia fundadora de línea jurisprudencial, reiterada por la Sentencia del TCP 0249/2012— se interpretó el sentido y los alcances de los principios generales de la actividad administrativa previstos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). Dichos principios fueron reiterados y complementados en los fundamentos jurídicos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0024/2018-S2, de 28 de febrero, entre muchas otras<sup>30</sup>.

Finalmente, no se debe olvidar que, en el sistema constitucional boliviano, la jurisprudencia constitucional está dotada de fuerza vinculante y es de cumplimiento obligatorio, según lo previsto en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Dicho artículo establece expresamente: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

## Conclusiones

Luego de la revisión de algunos aspectos conceptuales, así como del origen doctrinal y del desarrollo legislativo y jurisprudencial del Derecho Administrativo en Bolivia, se puede concluir que esta disciplina jurídica tiene por objeto de estudio a la Administración Pública en toda su complejidad. Para alcanzar

<sup>28</sup> Estos y otros fragmentos de jurisprudencia constitucional sobre Derecho Administrativo Sancionador ahora se hallan sistematizados en el **Boletín de Derecho Administrativo en Bolivia** – Junio 2025 (con notas adicionales de legislación y jurisprudencia), disponible en Vargas Lima (2025b).

<sup>29</sup> El FJ III.1.1 señala que: «El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Este principio está reconocido en el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que señala: ‘La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso’; esto implica, además, que los actos de la Administración pueden ser objeto de control judicial (vía contenciosa administrativa), como lo reconoce el art. 4 inc. i) de la LPA, al establecer que ‘El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables’. Otro signo del principio de sometimiento de la administración al derecho está referido a que la administración no puede sustraerse del procedimiento preestablecido, sino que debe sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo previsto en la norma que regula el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 2 establece que: ‘I. La Administración Pública ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley’».

<sup>30</sup> Los fundamentos jurídicos de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional pueden encontrarse en el **Boletín de Derecho Administrativo en Bolivia** (Abril 2025), que en su contenido incluye, además, el **Texto Ordenado de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo** (con notas adicionales de legislación y jurisprudencia) disponible en Vargas Lima (2025a).



legitimidad, dicha disciplina debe tener su base en las normas previstas por la Constitución, es decir, en los principios fundamentales, los principios ético-morales, los derechos fundamentales y garantías constitucionales que en ella se consagran. Esto es especialmente relevante si se considera que las normas constitucionales y principios tienen un efecto de transversalidad sobre el resto de las normas constitucionales y de todas las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico administrativo, cuando son sometidas a control normativo para verificar su compatibilidad con la Ley Fundamental.

Esta circunstancia implica la necesidad de revisar todo el contenido general y las fuentes del Derecho Administrativo, a fin de destacar la importancia de la Constitución, que ahora establece ciertas pautas para guiar la interpretación de los derechos fundamentales, y del Bloque de Constitucionalidad, integrado por diversos elementos desarrollados por la jurisprudencia constitucional. La utilidad de estos instrumentos ha sido esencial para determinar la constitucionalidad de diversas disposiciones legales en materia administrativa. En consecuencia, tanto todas las autoridades públicas elegidas por voto popular como las demás autoridades administrativas deben considerar estas fuentes al adoptar decisiones en cada una de las instituciones públicas del Estado.

Bajo ese contexto, la enseñanza de esta disciplina jurídica que está en constante transformación, como es el Derecho Administrativo, debe ser realizada sobre la base de los principios y valores que proclama la Constitución. Ello significa que, en el ámbito administrativo, el *principio de legalidad* implica el sometimiento de la Administración pública al ordenamiento jurídico, en cuya cúspide se encuentra la Constitución como Norma Suprema para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; por lo tanto, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a los mandatos de la Constitución y la ley, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidos (entendimiento reiterado por la SCP 0411/2017-S1, de 12 de mayo, entre otras).

En consecuencia, el principio de legalidad indudablemente es de obligatoria observancia en la actividad administrativa del Estado y sus instituciones, pero también es esencial en el ejercicio de la función pública; por ello, los funcionarios públicos deben sujetar sus actuaciones a dos directrices esenciales: a) *principio de constitucionalidad*, en virtud del cual todos los actos de la Administración pública, incluidos aquellos que emanen de la potestad administrativa sancionatoria<sup>31</sup>, deben someterse no solamente al bloque de legalidad imperante, sino a la Constitución, que tiene un valor normativo como fuente directa de Derecho (SCP 0137/2013); y b) *principio de convencionalidad*, conforme al cual todas las autoridades públicas deben acatar los mandatos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —ratificada por el Estado boliviano— y la interpretación que de ella se ha realizado en la jurisprudencia establecida por la Corte IDH, cuyos pronunciamientos —sentencias y opiniones consultivas— forman parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad (SC 0110/2010-R) y, en consecuencia, son de obligatoria observancia para su cumplimiento por parte de todas las autoridades públicas y los particulares. Entonces, este es el punto de partida ineludible para remover cualquier tipo de formalidades burocráticas que impidan la materialización de los derechos de los administrados y lograr estructurar una Administración pública que brinde servicio al ciudadano con enfoque de derechos humanos en todas las instituciones públicas del Estado.

He ahí las bases de la pedagogía constitucional que se requiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho Administrativo en Bolivia, la cual debe llevarse adelante en todas las universidades para, de ese modo, diseñar una formación educativa basada en los derechos humanos, cuya capacitación deben recibir los estudiantes constantemente y así también se puedan ampliar los conocimientos de aquellos profesionales ávidos de aprender que acceden a cursos de especialización en nuestro país.

<sup>31</sup> La jurisprudencia constitucional ha establecido que uno de los cauces propios de la función administrativa se manifiesta en la llamada "potestad administrativa sancionatoria", cuyo fundamento encuentra razón de ser en el "poder punitivo del Estado", presupuesto que en el ámbito disciplinario debe enmarcarse a los postulados propios de un Estado Constitucional de Derecho, en el cual los procedimientos sancionatorios sean coherentes y armoniosos con los derechos fundamentales (Sentencia del TCP 0276/2013).

## Referencias

- Asbún, J. (2007). *Derecho Constitucional general. Conceptos jurídicos básicos* (5a ed). Grupo Editorial Kipus.
- Bielsa, R. (1964). *Derecho Administrativo* (6a ed., tomo I). La Ley.
- Brewer-Carías, A. R. (2020). *Derecho Administrativo. Estudios*. Editorial Jurídica Venezolana.
- Bolivia. (1884, 30 de diciembre de 1884). *Ley de Expropiación*.
- Bolivia. (1967, 02 de febrero de 1967). *Constitución Política del Estado*.
- Bolivia. (1990, 20 de julio de 1990). *Ley N.º 1178 de los Sistemas de Administración, Fiscalización y Control Gubernamentales*.
- Bolivia. (1992, 27 de abril de 1992). *Ley N.º 1333 del Medio Ambiente*.
- Bolivia. (1994, 28 de octubre de 1994). *Ley N.º 1600 del Sistema de Regulación Sectorial*.
- Bolivia. (1994, 21 de diciembre de 1994). *Ley N.º 1604 de Electricidad*.
- Bolivia. (1996, 12 de julio de 1996). *Ley N.º 1700 Forestal*.
- Bolivia. (1996, 18 de octubre de 1996). *Ley N.º 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria*.
- Bolivia. (1998, 22 de junio de 1998). *Ley N.º 1874 de Concesiones de Obras Públicas de Transporte*.
- Bolivia. (1998, 21 de agosto de 1998). *Decreto Supremo N.º 25134 del Sistema Nacional de Carreteras*.
- Bolivia. (1999, 27 de octubre de 1999). *Ley N.º 2027 Estatuto del Funcionario Público*.
- Bolivia. (2000, 20 de abril de 2000). *Decreto Supremo N.º 25749 del Reglamento del Estatuto del Funcionario Público*.
- Bolivia. (2001, 16 de marzo de 2001). *Decreto Supremo N.º 26115 del Sistema de Administración del Personal*.
- Bolivia. (2002, 28 de abril de 2002). *Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo*.
- Bolivia. (2003, 23 de julio de 2003). *Decreto Supremo N.º 27113 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo*.
- Bolivia. (2003, 02 de agosto de 2003). *Ley N.º 2492 Código Tributario Boliviano*.
- Bolivia. (2004, 09 de enero de 2004). *Decreto Supremo N.º 27310 del Reglamento del Código Tributario Boliviano*.
- Bolivia. (2005, 04 de marzo de 2005). *Resolución Suprema N.º 222957 del Sistema de Contabilidad Integrada*.
- Bolivia. (2005, 17 de mayo de 2005). *Ley N.º 3058 de Hidrocarburos*.
- Bolivia. (2005, 01 de diciembre de 2005). *Resolución Suprema N.º 225557 del Sistema de Programación de Operaciones para las Entidades Estatales*.
- Bolivia. (2005, 01 de diciembre de 2005). *Resolución Suprema N.º 225558 del Sistema del Presupuesto*.
- Bolivia. (2006, 28 de noviembre de 2006). *Ley N.º 3545 de Reconducción Comunitaria*.
- Bolivia. (2007, 02 de agosto de 2007). *Decreto Supremo N.º 29215 del Reglamento de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria*.
- Bolivia. (2009, 07 de febrero de 2009). *Constitución Política del Estado*.

- Bolivia. (2009, 07 de febrero de 2009). *Decreto Supremo N.º 29894 de la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional*.
- Bolivia. (2009, 09 de abril de 2009). *Decreto Supremo N.º 0071*.
- Bolivia. (2009, 28 de junio de 2009). *Decreto Supremo 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios*.
- Bolivia. (2010, 16 de junio de 2010). *Ley N.º 018 del Órgano Electoral Plurinacional*.
- Bolivia. (2010, 24 de junio de 2010). *Ley N.º 025 del Órgano Judicial*.
- Bolivia. (2010, 30 de junio de 2010). *Ley N.º 026 del Régimen Electoral*.
- Bolivia. (2010, 06 de julio de 2010). *Ley N.º 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional*.
- Bolivia. (2010, 19 de julio de 2010). *Ley N.º 031 de Autonomías y Descentralización*.
- Bolivia. (2010, 20 de diciembre de 2010). *Ley N.º 070 de Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"*.
- Bolivia. (2011, 16 de agosto de 2011). *Ley N.º 165 General de Transporte*.
- Bolivia. (2014, 09 de enero de 2014). *Ley N.º 482 de Gobiernos Autónomos Municipales*.
- Bolivia. (2014, 28 de mayo de 2014). *Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia*.
- Bolivia. (2016, 13 de diciembre de 2016). *Ley N.º 870 del Defensor del Pueblo*.
- Brewer-Carías, A. R. (1979). El derecho de propiedad y la libertad económica. Evolución y situación actual en Venezuela. En Universidad Central de Venezuela (Ed.), *Estudios sobre la Constitución* (pp. 1139–1246). Universidad Central De Venezuela. <https://bit.ly/3EpVtDT>
- Comanducci, P. (2002). Formas de (neo)constitucionalismo: Un análisis metateórico (trad. de M. Carbonell). *Isonomía*, (16), 89–112. <https://www.isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/511>
- Corda, M.V. (08 de febrero de 2024). *151 años del fallo Blanco: Un precedente del Derecho Administrativo*. Palabras del Derecho. <https://bit.ly/3Q65nNG>
- Cuadra, H. (Coord.). (1979). *Estudios de Derecho Económico* (tomo III). Universidad Nacional Autónoma De México. <https://bit.ly/3WOvXPf>
- Chapus, R. (1998). *Droit Administratif general* (12a ed., tomo 1). MontChrestien.
- D'avis, J. A. (1960). *Curso de Derecho Administrativo. Doctrina general y legislación boliviana*. Editorial Letras.
- Dermizaky Peredo, P. (1985). *Derecho Administrativo*. Editorial Los Amigos del Libro.
- Dermizaky Peredo, P. (1988). *Derecho Administrativo* (2a ed.). Editorial Los Amigos del Libro.
- Dermizaky Peredo, P. (1999). *Derecho Administrativo* (4a ed.). Editorial Judicial.
- Dermizaky Peredo, P. (2001). *Derecho Administrativo* (5a ed.). Editora J & V.
- Dermizaky Peredo, P. (2004). *Derecho Constitucional* (7a ed.). Editora J & V.
- Diez, M. M. (1963). *Derecho Administrativo* (tomo I). Buenos Aires: Omeba.
- Fernández, L. (1989). *Derecho Administrativo. Administración pública para el desarrollo* (2a ed.). Imprenta editorial G.H.

- Fernández Ruiz, J. (2016). *Derecho Administrativo*. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- García de Enterría, E., & Fernández, T. R. (1988). *Curso de Derecho Administrativo* (4a ed., tomo I). Civitas.
- Guastini, R. (2001). La constitucionalización del ordenamiento jurídico: El caso italiano. En J.R. Cossío y R. Vázquez (Eds.), *Estudios de teoría constitucional* (pp. 153–175). Instituto de Investigaciones Jurídicas
- Gordillo, A. (2013). *Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas: Teoría general del Derecho Administrativo*. Fundación de Derecho Administrativo. <https://bit.ly/3GRCRhF>
- Herrera Áñez, W. (23 de febrero de 2025). El cabildo popular. *El Deber*. [https://eldeber.com.bo/opinion/el-cabildo-popular\\_504842/](https://eldeber.com.bo/opinion/el-cabildo-popular_504842/)
- Instituto Nacional de Administración Pública (2015). *Las grandes sentencias de la jurisprudencia administrativa* (20a ed.). Dalloz. [https://www.boe.es/biblioteca\\_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2018-86](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2018-86)
- Jèze, G. (1948). *Los principios generales del Derecho Administrativo* (tomo 1). Editorial Depalma.
- López Barrera, Y., & Valda López, F. (2022). *Lecciones de Derecho Administrativo y su procedimiento*. Imprenta I-Grafic.
- Marienhoff, M. S. (1980). *Tratado de Derecho Administrativo: Teoría general*. Editorial Abeledo Perrot.
- Martínez Bravo, J. A. (2018). *Derecho Administrativo boliviano* (3a ed.). Imago Mundi. <https://bit.ly/42A5d8v>
- Martínez Guzmán, O. (14 de febrero de 2023). 150 del Arrêt Blanco de 8 de febrero de 1873. ICABLOG. <https://icablog.icab.cat/es/150-anos-del-arret-blanco-de-8-de-febrero-de-1873/>
- Mayer, O. (1949). *Derecho Administrativo alemán* (tomo I). Editorial Depalma.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2023). NB-SABS (texto compilado). Ministerio de Economía y Finanzas. <https://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php/node/9745>
- Nava Negrete, A. (1965). Derecho Administrativo (tomo 1) [Reseña del libro por el autor Manuel Diez]. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, (57), 287–290. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/issue/view/1501>
- Órgano Electoral Plurinacional (2021). *Compendio normativo para la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales 2021*. Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. [https://www.oep.org.bo/compendio\\_subnacionales\\_2021/](https://www.oep.org.bo/compendio_subnacionales_2021/)
- Pantoja Bauzá, R. (2016). El concepto de Derecho Administrativo en el derecho chileno. *Revista de Derecho Público*, (64), 189–212. <https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/43103>
- Prieto Sanchis, L. (2002). *Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial*. Editorial Palestra.
- Quinteros, J. S. (1894). *Derecho Administrativo*. <https://bit.ly/4ood68N>
- Revilla Quezada, A. (1958). *Curso de Derecho Administrativo boliviano* (2a ed.). Empresa Industrial Gráfica E. Burillo.
- Rivera Santivañez, J. A. (1999). *Reformas constitucionales. Avances, debilidades y temas pendientes* (2a ed.). Editorial Kipus.
- Rivera Santivañez, J. A. (2004). *Jurisdicción constitucional. Procesos constitucionales en Bolivia* (2a ed.). Grupo Editorial Kipus.

- Rivera Santivañez, J. A. (2006). ¿Hasta dónde reformar la Constitución?. *Revista Opiniones y Análisis*, (78), 39–93.
- Rivera Santivañez, J. A. (2007). *Temas de Derecho Procesal Constitucional*. Grupo Editorial Kipus.
- Rivera Santivañez, J. A. (2008). *Hacia una nueva constitución. Luces y sombras del proyecto modificado por el parlamento*. Fundación Konrad Adenauer, Fundappac y Oficina Jurídica para la Mujer.
- Rodríguez-Arana, J. (2022). Derecho Administrativo, dignidad humana y derechos sociales fundamentales. *Revista Jurídica Austral*, 3(1), 183–213. <https://doi.org/10.26422/RJA.2022.0301.rod>
- Romero Sandoval, R. (1983). *Derecho Civil (según los apuntes de Derecho Civil boliviano del Prof. Dr. Raúl Romero Linares)*. Editorial Los Amigos del Libro.
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2003). Sentencia Constitucional N.º 0009/2003 (25 de abril de 2003).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2003). Sentencia Constitucional N.º 0757/2003-R (04 de junio de 2003).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2003). Sentencia Constitucional N.º 1662/2003-R (17 de noviembre de 2003).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2004). Sentencia Constitucional N.º 0042/2004 (22 de abril de 2004).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2004). Sentencia Constitucional N.º 0457/2004-R (31 de marzo de 2004).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2004). Sentencia Constitucional N.º 1420/2004 (06 de septiembre de 2004).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2004). Sentencia Constitucional N.º 1464/2004-R (13 de septiembre de 2004).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2004). Sentencia Constitucional N.º 1781/2004-R (16 de noviembre de 2004).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2006). Sentencia Constitucional N.º 0045/2006 (02 de junio de 2006).
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2006). Sentencia Constitucional N.º 0069/2006 (08 de agosto de 2006).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2010). Sentencia Constitucional N.º 0110/2010-R (10 de mayo de 2010).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2010). Sentencia Constitucional N.º 0982/2010-R (17 de agosto de 2010).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2010). Sentencia Constitucional N.º 1058/2010-R (23 de agosto de 2010).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2010). Sentencia Constitucional N.º 1369/2010-R (20 de septiembre de 2010).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2012). Sentencia Constitucional N.º 0112/2012 (27 de abril de 2012).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2012). Sentencia Constitucional N.º 0121/2012 (02 de mayo de 2012).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2012). Sentencia Constitucional N.º 0249/2012 (29 de mayo de 2012).



- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2012). Sentencia Constitucional N.º 0270/2012 (04 de junio de 2012).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2012). Sentencia Constitucional N.º 0846/2012 (20 de agosto de 2012).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2012)- Sentencia Constitucional N.º 1227/2012 (07 de septiembre de 2012).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2013). Sentencia Constitucional N.º 0137/2013 (05 de febrero de 2013).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2013). Sentencia Constitucional N.º 0276/2013, de 13 de marzo.
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2013). Declaración Constitucional N.º 0003/2013 (25 de abril de 2013).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2013). Sentencia Constitucional N.º 1617/2013 (04 de octubre de 2013).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2017). Sentencia Constitucional N.º 0411/2017-S1 (12 de mayo de 2017).
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2018). Sentencia Constitucional N.º 0024/2018-S2 (28 de febrero de 2018).
- Valencia Vega, A. (1985). *Manual de Derecho Constitucional*. Editorial Juventud.
- Vargas Lima, A. E. (2018). Bloque de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad en Bolivia. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*. 24, 535–556  
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39262.pdf>
- Vargas Lima, A. E. (2022). Revisión histórica de las fuentes doctrinales para la enseñanza del Derecho Administrativo en Bolivia. *Cultura Latinoamericana*, 35 (1), pp. 198–227. <https://bit.ly/44OcHnX>
- Vargas Lima, A. E. (2023). *El origen histórico de las lecciones sobre Derecho Administrativo en Bolivia. Crónica sobre el hallazgo del libro de Teodosio Lares del siglo XIX y su influencia hasta la alborada del siglo XXI*. En: Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Ed.), *La historia de la Academia Carolina y su influjo en el contexto americano* (tomo 2) (pp. 121–160). Servicios Gráficos Conexión Creativa.
- Vargas Lima A.E. (2025a). *Boletín de Derecho Administrativo en Bolivia* (abril de 2025). Academia.  
<https://bit.ly/3UhlUzb>
- Vargas Lima A.E. (2025b). *Boletín de Derecho Administrativo en Bolivia* (junio de 2025). Academia.  
<https://bit.ly/4o0KtiS>
- Zanobini, G. (1954). *Curso de Derecho Administrativo* (trad. de H. Massnatta, vol. I). Ediciones Arayú.